************1**
VS.
JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO.

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ

RECURSO DE REVISIÓN
EXPEDIENTE 848/2019

Mexicali, Baja California, dieciséis de abril de dos mil veinticuatro.

RESOLUCIÓN que revoca la sentencia dictada el ocho de junio dos mil veintiuno por la entonces Primera Sala, actualmente Juzgado Primero de este Tribunal, y sobresee en el juicio citado al rubro.

GLOSARIO

Ley del Tribunal	Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California
ISSSTECALI	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.
Junta Directiva	Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.
Sala	Primera Sala, actualmente Juzgado Primero de este Tribunal.

I. R E S U L T A N D O S

Antecedentes en sede administrativa.

1. El diez de septiembre de dos mil dieciocho, **********1 solicitó ante la Dirección de Pensiones y Jubilaciones de ISSSTECALI [específicamente ante el Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones] una pensión por de retiro por edad y tiempo de servicio, bajo la consideración de que reunía todos los requisitos previstos en la ley. No obstante, no recibió una respuesta por parte de la autoridad.

Antecedentes en primera instancia.

2. Por tal motivo, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, **********1 presentó ante la Sala una demanda en contra la Junta Directiva de.

VERSIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN

3. Por sentencia de fecha de ocho de junio de dos mil veintiuno, la Sala declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, por estimar que la parte actora acreditó que cumple los requisitos para obtener la pensión de por edad y tiempo de servicio y condenó a la demandad a que emita un acuerdo en el que la conceda.

Antecedentes en segunda instancia.

5. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia referida en el punto anterior; mismo que fue admitido mediante acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

6. En dicho acuerdo se ordenó dar vista a las partes por el término de cinco días para que manifestaran lo que a su derecho conviniese y, notificarlas que, a efecto de dictar resolución en revisión, el Pleno se integraría con los Magistrados Alberto Loaiza Martínez, como ponente, Carlos Rodolfo Montero Vázquez y Guillermo Moreno Sada, sin que hubiesen efectuado manifestación alguna.

7. La autoridad demandada, mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, manifestó que en fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós se dictó el acuerdo **********2 (foja 199), a través del cual se concedió la pensión solicitada a la parte actora, por lo que pidió que se ordenara el archivo del asunto como total y definitivamente concluido; por acuerdo del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la actora con el escrito de referencia para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna.

8. Así, una vez agotado el procedimiento de conformidad con lo establecido en la Ley del Tribunal, se procede a dictar resolución correspondiente de acuerdo a los siguientes…

II. C O N S I D E R A N D O S

9. **PRIMERO.- COMPETENCIA.** El Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California es competente para conocer el recurso de referencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 17, fracción II, y 94, fracción IV, de la Ley del Tribunal, así como en términos de los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno.

10. **SEGUNDO.- PROCEDENCIA.** Antes de analizar los agravios que planteó la autoridad en su recurso, es deber de este Pleno posicionarse sobre la procedencia del juicio, tomando en cuenta los

VERSIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN

elementos de prueba que obran en autos y la solicitud que en ese sentido hizo la autoridad.

12. Ahora bien, para efectos de que esta resolución gane en claridad, por principio de cuentas es necesario hacer la siguiente reseña de antecedentes:

Contexto y antecedentes.

13. Conforme a lo señalado en el párrafo 7, mediante acuerdo **********2, la Junta Directiva de ISSSTECALI otorgó a **********1 pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, con efectos a partir del primero de agosto de dos mil veintidós.

14. La intención de la autoridad al exhibir esos medios de prueba era acreditar la actualización de una causal de improcedencia para el sobreseimiento del juicio.

15. Por acuerdo de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, este Pleno dio vista a la parte actora con los documentos antes referidos (vista que le fue notificada por boletín jurisdiccional el veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, según las constancias que obran en autos); sin embargo, no la atendió ni se pronunció al respecto.

Puntos jurídicos a resolver:

18. En mérito de lo anterior, en principio este Pleno deberá determinar si en segunda instancia se pueden ofrecer y valorar pruebas tendentes a demostrar la actualización de una causal de improcedencia.

19. Resuelto lo anterior y de encontrar que si es factible, entonces lo conducente será establecer si los medios de prueba que ofreció la autoridad actualizan o no causal de improcedencia, y si derivado de ello, lo propio es el sobreseimiento del juicio. En forma precisa se deberá determinar sí la Junta Directiva de ISSSTECALI satisfizo o no la pretensión de la demandante.

Criterios:

20. El Pleno de este Tribunal puede hacer valer causales de improcedencia aun en el supuesto de que no las invoquen las partes y más aún cuando éstas las propongan; pero además, para tales propósitos, puede recibir y analizar medios de prueba.

21. Por otro lado, una vez valorados los elementos de convicción que obran en autos es posible concluir que la autoridad satisfizo la pretensión de la parte actora. Por tanto, es factible el sobreseimiento del juicio.

VERSIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN

Justificación:

- **Sobre la posibilidad de ofrecer y valorar pruebas en segunda instancia relacionadas con el sobreseimiento del juicio.**

22. Este Tribunal en Pleno, al resolver el recurso de revisión 5/2020, determinó que el estudio de la improcedencia del juicio no es un razonamiento orientado a la defensa de una de las partes; no está a su disposición, ni responde a su exclusivo interés; lejos de eso, constituye un planteamiento que trasciende este aspecto al ser de orden público e interés general, toda vez que la intención del legislador es que todo proceso jurisdiccional se resuelva siempre y cuando no preexista un obstáculo para ello.

23. Así, en esa misma lógica, el artículo 41, fracción II, de la Ley del Tribunal estipula que procede el sobreseimiento del juicio cuando apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia:

> ***ARTÍCULO 41.-*** *Procede el sobreseimiento del juicio:*
> *I…*
> *II.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;*

24. Como puede apreciarse del precepto anterior, el legislador no circunscribió el sobreseimiento del juicio a la primera instancia, tampoco estableció que solo las Salas podrían dictarlo, ni lo constriñó a la actuación o alegación de determinada parte procesal; se limitó a indicar que el juicio debe sobreseerse cuando apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia, dejando en claro que su principal interés era impedir el pronunciamiento de una sentencia que se ocupe del fondo de lo debatido, cuando no existan condiciones para ello.

25. Así, a partir de la interpretación literal de ese precepto legal y atendiendo al principio "donde la ley no distingue no se debe distinguir", se tiene que, al igual que los órganos de primera instancia, el Pleno de este Tribunal puede hacer valer causales de improcedencia aun en el supuesto de que no lo invoquen las partes y más aún cuando éstas las propongan, puesto que siendo estas causales instituciones de orden público, su análisis puede llevarse a cabo en cualquier etapa del juicio incluso en segunda instancia.

26. Aceptar lo contrario implicaría abrir la posibilidad para que este Pleno legitime procesos y resoluciones que no hubieren satisfecho parámetros legales; lo cual iría en contra de la finalidad perseguida por el legislador en el artículo 41, fracción II, de la Ley del Tribunal.

27. Apoya a lo anterior el criterio relevante 6/2023, aprobado por el Pleno de este Tribunal, de rubro *“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NOVEDOSAS. EL PLENO DEL TRIBUNAL ESTÁ FACULTADO PARA ESTUDIARLAS DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE*

VERSIÓN PÚBLICA

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, VIGENTE HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2021).”[1], consultable en su portal oficial electrónico.

27. Ahora bien, por otra parte, se tiene que en términos del artículo 94 de la Ley del Tribunal el objeto de control en el recurso de revisión lo constituyen, entre otros, las sentencias que resuelvan en definitiva dictadas por los órganos de primera instancia. Y para determinar su legalidad o ilegalidad, este Pleno debe tomar en consideración los mismos elementos que los propios órganos tuvieron a su alcance.

28. Por tanto, de aceptarse que en revisión es posible ofrecer medios de prueba que no fueron ofrecidos ni aportados en primera instancia, se desnaturalizaría ese recurso, puesto que ello implicaría que el Pleno tendría que posicionarse no sobre la legalidad de la sentencia dictada por los órganos de primera instancia, sino sobre la legalidad del acto administrativo impugnado en el juicio.

29. No obstante, cuando las pruebas ofrecidas en segunda instancia se relacionen con una causal de improcedencia, el Pleno sí debe recibirlas y valorarlas, debido que al hacerlo no estaría evaluando la legalidad del acto impugnado en el juicio (y con ello pasando por alto las sentencias dictadas por los órganos de primera instancia), lo que estaría haciendo sería analizar presupuestos procesales de orden público sin los cuales el proceso no puede desarrollarse ni resolverse válidamente.

30. Apoya a lo anterior el criterio relevante 5/2023 aprobado por el Pleno de este Tribunal, de rubro *“PRUEBAS OFRECIDAS EN SEGUNDA INSTANCIA. PROCEDE ADMITIRLAS SI CON ELLAS SE PRETENDE ACREDITAR UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOVEDOSA EN EL JUICIO.”*[2], consultable en el portal oficial electrónico del Tribunal.

---

[1] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NOVEDOSAS. EL PLENO DEL TRIBUNAL ESTÁ FACULTADO PARA ESTUDIARLAS DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, VIGENTE HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2021).

Hechos: Durante la tramitación del recurso de revisión, una de las partes planteó una causal de improcedencia que no fue formulada en primera instancia. Criterio: El Pleno del Tribunal está facultado para estudiar causales de improcedencia de oficio o a petición de parte. Justificación: De la lectura del artículo 41, fracción II, de la Ley del Tribunal se advierte que el legislador se limitó a indicar que el juicio debe sobreseerse cuando apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia, dejando en claro que su principal interés es impedir el pronunciamiento de una sentencia que resuelva el fondo de lo debatido, cuando no existan condiciones para ello; es decir, no circunscribió el sobreseimiento del juicio a la primera instancia, ni estableció que solo las Salas podrían dictarlo, ni lo constriñó a la actuación o alegación de determinada parte procesal. Así, a partir de la interpretación literal de ese precepto legal y atendiendo al principio "donde la ley no distingue no se debe distinguir", es posible concluir que el Pleno de este Tribunal puede estudiar causales de improcedencia novedosas, de oficio o a petición de parte; puesto que, siendo estas causales instituciones de orden público e interés general, su análisis puede llevarse a cabo en cualquier etapa del juicio. Aceptar lo contrario implicaría abrir la posibilidad para que este Pleno legitime procesos y resoluciones que no hubieren satisfecho parámetros legales; lo cual es contrario a la finalidad perseguida por el referido precepto legal.

[2] PRUEBAS OFRECIDAS EN SEGUNDA INSTANCIA. PROCEDE ADMITIRLAS SI CON ELLAS SE PRETENDE ACREDITAR UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOVEDOSA EN EL JUICIO.

Hechos: Durante la tramitación del recurso de revisión, la autoridad demandada ofreció medios de prueba, con el fin de acreditar la actualización de una causal de improcedencia que no fue planteada

VERSIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN

31. En relación a esto, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 40/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 186003, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 126, de rubro *"IMPROCEDENCIA. LAS PRUEBAS QUE ACREDITAN LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSAL, PUEDEN ADMITIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN, SALVO QUE EN LA PRIMERA INSTANCIA SE HAYA EMITIDO PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO Y NO SE HUBIESE COMBATIDO."*[3]

31. Por tanto, como una conclusión preliminar es posible sostener que el Pleno puede hacer valer causales de improcedencia aun en el supuesto de que no las invoquen las partes y más aún cuando éstas las propongan; pero además, para tales propósitos, puede recibir y analizar medios de prueba.

32. Resuelto lo anterior, entonces lo conducente es establecer si los medios de convicción que ofreció la autoridad actualizan o no la causal que hizo valer, y si derivado de ello lo propio es el sobreseimiento del juicio.

- **Sobre si los medios de prueba que ofreció la autoridad actualizan o no una causal de improcedencia, y si derivado de ello, lo conducente es sobreseer el juicio.**

---

en primera instancia. Criterio: Es procedente admitir pruebas en segunda instancia, si con ellas se pretende acreditar una causal de improcedencia no planteada en primera instancia. Justificación: En términos del artículo 94 de la Ley del Tribunal, el objeto de control en el recurso de revisión lo constituyen las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal, y para determinar su legalidad o ilegalidad, este Pleno debe tomar en consideración los mismos elementos que las Salas tuvieron a su alcance. Por tanto, de aceptarse que en revisión es posible ofrecer medios de prueba que no fueron ofrecidos ni aportados en primera instancia, se desnaturalizaría ese recurso, puesto que ello implicaría que el Pleno tendría que posicionarse no sobre la legalidad de la sentencia dictada por la Sala, sino sobre la legalidad del acto administrativo impugnado en el juicio. No obstante, cuando las pruebas ofrecidas en segunda instancia se relacionen con una causal de improcedencia, el Pleno sí debe recibirlas y valorarlas, debido a que al hacerlo no estaría evaluando la legalidad del acto impugnado en el juicio (y con ello pasando por alto la sentencia dictada por la Sala), sino analizando presupuestos procesales de orden público, sin los cuales el proceso no puede desarrollarse ni resolverse válidamente.

[3] IMPROCEDENCIA. LAS PRUEBAS QUE ACREDITAN LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSAL, PUEDEN ADMITIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN, SALVO QUE EN LA PRIMERA INSTANCIA SE HAYA EMITIDO PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO Y NO SE HUBIESE COMBATIDO. Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, y acorde con el criterio firme sustentado por este Alto Tribunal, el acto reclamado debe apreciarse tal y como fue probado ante la autoridad responsable y, por ende, en los juicios de garantías en la vía directa o en revisión no pueden ser admitidas ni valoradas pruebas que no se hayan aportado ante esa autoridad, puesto que las situaciones concretas que le fueron planteadas como acto reclamado podrían ser modificadas o cambiadas, también lo es que esta restricción únicamente debe tener aplicación cuando se trata de pruebas tendientes a demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues no puede ni debe hacerse extensiva a aquellos medios de convicción tendientes a acreditar la actualización de alguna causal de improcedencia del juicio, toda vez que su estudio, además de ser de oficio, según lo prevé el artículo 73, último párrafo, del ordenamiento legal invocado, impide que al actualizarse se examine el fondo del asunto, lo que ocasiona que no se vierta pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En este sentido, se concluye que en esas vías judiciales (amparo directo o en revisión), es factible que se admitan y valoren pruebas que evidencien la improcedencia del juicio de garantías, sin que ello signifique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, ya que, al no sufrir variación alguna la materia del acto reclamado, existe impedimento técnico jurídico para poder emitir pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, salvo en los casos en que la causal de que se trate haya sido motivo de pronunciamiento en la resolución de primera instancia del juicio de garantías y no se hubiere combatido ese aspecto en la revisión.

VERSIÓN PÚBLICA

33. Como ya se reseñó, la autoridad demandada informó que por virtud del Acuerdo **********2, de veintinueve de junio de dos mil veintidós, la Junta Directiva de ISSSTECALI otorgó a la parte actora una pensión por de retiro por edad y tiempo de servicio.

34. Al efecto, la autoridad exhibió copia certificada del acuerdo referido, visible a foja 199, en el que se señala:

> *"Los integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por sus siglas ISSSTECALI, conceden 88 (ochenta y ocho) jubilaciones y pensiones de retiro por edad y tiempo de servicio de MAGISTERIO, con efectos a partir del 1ro. de agosto de 2022, conforme al documento que se anexa y que forma parte integrante del presente acuerdo."*

35. Asimismo exhibió anexo del reseñado acuerdo, consistente en listado de 88 jubilaciones y pensiones de retiro por edad y tiempo de servicio, en el que se señala el nombre del actor, tipo de trámite: retiro por edad y tiempo de servicio. Constancias a las que se les confiere valor probatorio de conformidad con los artículos 322, fracción V, y 323 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en relación con el artículo 79 de la Ley del Tribunal, con las que se acredita que le fue otorgada pensión por por edad y tiempo de servicio a **********1 con efectos a partir del primero de agosto de dos mil veintidós.

36. Como puede advertirse de la lectura de la demanda, la pretensión de la actora era obtener una pensión de retiro por edad y tiempo de servicio; por tanto, si la Junta Directiva de ISSSTECALI le otorgó la pensión solicitada, el juicio debe sobreseerse, al haberse satisfecho el interés de la demandante de obtener una pensión por edad y tiempo de servicio y actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 41 de la Ley del Tribunal.

37. En las relatadas condiciones, lo procedente es revocar la sentencia dictada el ocho de junio de dos mil veintiuno por el Juzgado Primero de este Tribunal y en su lugar, se decreta el sobreseimiento en el juicio.

38. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley del Tribunal, es de resolver y se...

R E S U E L V E:

ÚNICO.- Se revoca la sentencia dictada el ocho de junio de dos mil veintiuno por la entonces Primera Sala, actualmente Juzgado Primero, de este Tribunal, y en su lugar, se decreta el sobreseimiento en el juicio.

VERSIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN

Notifíquese a las partes mediante boletín jurisdiccional enviando el aviso correspondiente.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, por unanimidad de votos de los Magistrados Alberto Loaiza Martínez, Carlos Rodolfo Montero Vázquez y Guillermo Moreno Sada, siendo ponente el primero de los mencionados, mismos que firman ante la presencia de la Secretaria General de Acuerdos, Claudia Carolina Gómez Torres, quien da fe.

***ALM**/MMR*

VERSIÓN PÚBLICA

1

"ELIMINADO: Nombre, 5 párrafo(s) con 5 renglones, en fojas 1, 2, 3 y 7. Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales."

2

"ELIMINADO: Número de acuerdo, 3 párrafo(s) con 3 renglones, en fojas 2, 3 y 7. Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales."

La suscrita Licenciada Claudia Carolina Gómez Torres, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, hace constar: Que lo transcrito con anterioridad corresponde a una versión pública de resolución de Segunda Instancia dictada en el expediente 848/2019, en la que se suprimieron datos que se han clasificado como confidenciales, cubriendo el espacio correspondiente, insertando diez asteriscos, versión que va en ocho fojas útiles.----------
Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 55 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinte días del mes de agosto de dos mil veinticuatro.-

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA GENERAL
MEXICALI, B.C.